



e-l@tina

Revista electrónica de estudios latinoamericanos

[e-l@tina](#) es una publicación del
Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina ([GESHAL](#))
con sede en el
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe ([IEALC](#))
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

El conflicto agrario pampeano durante la convertibilidad: actores, características y desarrollo de la acción colectiva de protesta*

Eduardo Azcuy Ameghino

Docente Investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: cica@fce.uba.ar

Recibido con pedido de publicación: 13 de mayo del 2007

Aceptado para publicación: 23 de mayo del 2007

* Ponencia presentada en la Mesa Temática Abierta 113, “Conflictos, organizaciones y movimientos sociales en la historia agraria Argentina y Latinoamericana desde comienzos del Siglo XX a la actualidad”, de las XXI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, San Miguel de Tucumán, 19-21 de setiembre de 2007.

Resumen

El conflicto agrario pampeano durante la convertibilidad: actores, características y desarrollo de la acción colectiva de protesta

En la región pampeana argentina durante la vigencia del programa económico neoliberal aplicado entre 1991 y 2001 se produjo un gran desarrollo de la producción agrícola. Sin embargo esto ocurrió en el marco de un agudo proceso de concentración del capital agrario que afectó severamente a los pequeños y medianos productores, que en muchos casos se endeudaron y quebraron debiendo abandonar sus actividades. Como respuesta a esta situación durante la década mencionada se produjeron numerosas manifestaciones de protesta rural, que hicieron de los noventa uno de los períodos de mayor conflictividad agraria del siglo XX.

En este artículo nos proponemos reflexionar sobre algunos problemas analíticos vinculados con el estudio del período, en especial sobre las relaciones entre la posición de clase y los diferentes tipos de conflictividad, la posición de los partidos políticos tradicionales sobre los problemas rurales, y la representación de lo agrario en la ideología de los sectores sociales urbanos.

Palabras clave: conflicto social; convertibilidad; acción colectiva

Summary

The pampeano social conflict during the convertibility: thoughts and problems about the collective protest

The Pampean agrarian social conflict during convertibility: some considerations and questions on collective protest. A great development of agricultural production took place in the Pampean zone during the neo-liberal economic program applied between 1991 and 2001. However, this development occurred simultaneously with a process of capital concentration that severely affected small and medium producers. In many cases, they had to take up credits at a very high interest rate and thus went bankrupt. As a result, there were a lot of demonstrations of rural protest during the decade, turning it into a peak moment of agrarian conflict in the XX century. In this paper, I look at some analytical problems related to this period, especially those that have to do with the relationship between class position and the different types of conflict, the attitude of traditional political parties towards rural problems, and the representation of the rural world in the ideology of the urban social segments.

Keywords: social conflict; convertibility; collective protest

Introducción

A tono con los efectos devastadores del programa neoliberal sobre los pequeños y medianos productores pampeanos, uno de los rasgos más notorios de la acción social agraria durante los noventa fue el incremento sostenido de la conflictividad rural, materializada en diversas formas de protesta activa -como paros, cortes de ruta, concentraciones, marchas, emergencia de nuevos actores sociales combativos, etc.-, mediante las que los sectores más desfavorecidos por el modelo económico en vigencia manifestaron crecientemente su inconformismo y rebeldía (Giarraca y Teubal, 1993; Higa, 1999; Azcuy Ameghino, 2001).

Así, por ejemplo, desde la marcha a Plaza de Mayo de 1993, pasando por el paro agrario de 1994 y la constitución del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha en 1995 (Giarraca y Teubal, 1997; Azcuy Ameghino, 2001), se fueron eslabonando una serie de hitos referenciales del crecimiento de los conflictos, los que estimularon a su vez nuevos episodios de acción colectiva protagonizados centralmente por los chacareros (con participación, es cierto que desigual, de todas sus fracciones), aun cuando en distintos momentos y medidas aunaron a -o confluyeron con- la mayoría de los sujetos sociales agrarios y sus respectivas organizaciones gremiales.

En este sentido, las protestas recogieron diversos y con frecuencia contradictorios reclamos reivindicativos, en torno a los cuales se refleja tanto la especificidad de los efectos de las políticas públicas como la heterogeneidad de la estructura de clases en la que impactan, siendo dicha diversidad -y cada una de sus particularidades- la que determina en cada caso el sentido, la forma y la profundidad del efecto.

Puesto en otros términos: un terrateniente latifundista, un pool de siembras, un gran capitalista arrendatario de miles de hectáreas, un chacarero propietario de 50 hectáreas y un pequeño contratista que toma 150 has -por citar unos pocos ejemplos contrastados-, se vieron afectados (perjudicados y/o beneficiados) de diversas maneras, y por ende generaron y practicaron diferentes conflictividades, que deben ser individualizadas y especificadas para evitar que el análisis quede atrapado en la primera imagen, aparentialmente unitaria y homogénea, del fenómeno de las protestas agrarias.

Así, la Sociedad Rural Argentina apoyó en lo fundamental el modelo económico impuesto en 1991, y sólo sobre esa base realizó críticas y motorizó algunas protestas frente a aspectos puntuales de las políticas oficiales que juzgaron contraproducentes para los intereses de los grandes terratenientes y empresarios expresados por el accionar de dicha corporación, como los impuestos a la renta mínima presunta y a los débitos bancarios.

Con matices diferenciales respecto al fuerte compromiso con las políticas oficiales expresado por SRA, otras organizaciones -como Confederaciones Rurales Argentinas- se manifestaron en un sentido parecido al anterior, mientras que las restantes entidades principales -CONINAGRO y Federación Agraria-, aunque tomaron mayor distancia de algunos aspectos del programa de convertibilidad, tampoco plantearon una confrontación abierta con “el modelo”, muy influidas sus dirigencias por los humores políticos e ideológicos dominantes en el país y el mundo durante los noventa.

Un ejemplo de esta actitud, que de hecho implicaba una relativa claudicación respecto a la defensa sin concesiones de los intereses chacareros, fue la muy tardía -e incluso entonces, formalmente- de la FAA a la necesidad de un precio sostén en origen para los productos agrícolas. Esta medida, ajena por completo a la filosofía económica de libertad de mercados y desregulación vigente, fue sin embargo cada vez más reclamada por las bases federadas y por algunas filiales enroladas en corrientes internas opositoras a la línea oficial del presidente Bonetto, así como por otras expresiones de las pymes [pequeñas y medianas empresas] agrícolas.

Como puede observarse, al interior de la protesta rural se mezclan y solapan muy disímiles posicionamientos, de modo que la conflictividad que emerge a la consideración pública como dominante (como “la” conflictividad) tiende a reflejar el estado de la correlación de fuerzas entre los diferentes estratos sociales del agro y sus respectivas organizaciones político-gremiales, asimilando –y de hecho ocultando en alguna medida- los reclamos provenientes de los sectores relativamente más débiles a la perspectiva hegemónica.

Para el funcionamiento eficaz de estos mecanismos suele resultar determinante la presión que ejercen algunas corporaciones –sobre todo SRA y CRA- con el objeto de imponer su programa reivindicativo particular a la protesta general, a sabiendas de que el logro de la unidad de acción de las cuatro gremiales principales es un valor muy sentido por buena parte de los productores agrarios, tanto como respetado por los destinatarios de sus reclamos.

Teniendo en cuenta que también en el mundo agrario la convertibilidad produjo ganadores y perdedores, beneficiarios y víctimas respectivamente de los efectos de la concentración económica, se podrán calibrar plenamente las implicancias y consecuencias para el desarrollo de los conflictos de la confluencia de unos y otros encolumnados en última instancia bajo un programa reivindicativo sesgado sectorial, y muy limitado en sus filos críticos hacia las políticas neoliberales.

Sin embargo, a pesar de que esta dinámica tiñó buena parte de la protesta del campo, cabe puntualizar que cuando ésta fue orientada por los sectores gremiales más ligados con los productores familiares y pequeños capitalistas, las consignas cuestionaron aspectos nodales del programa de convertibilidad y desregulación, radicalizando las luchas a partir de la emergencia - menos diluida en estos casos- de la conflictividad específica de los chacareros que sufrían por la falta de escala, de capital de trabajo, de crédito y de retraso cambiario, todo agravado por un fuerte endeudamiento de arrastre y, con frecuencia, por los bajos precios internacionales.¹

Focalizando el análisis en la franja socioeconómica de la pequeña y mediana empresa agropecuaria, existe evidencia concluyente respecto a que de ella emergieron las más agudas y persistentes acciones colectivas de protesta agraria. En este sentido, los factores mencionados cumplieron un rol fundamental entre las causas determinantes del creciente tono de conflictividad social que caracterizó al agro pampeano, articulándose para ello con algunas trabas estructurales de larga data, especialmente eficaces en relación a limitar las posibilidades de sustentabilidad de las pequeñas explotaciones.

Estas circunstancias, junto a otros estímulos negativos provenientes del modelo económico sostenido por el menemismo y la Alianza –como carencia de políticas de sostén de precios y de refinanciación y/o condonación de deudas impagables-, golpearon con dureza a buena parte de la población rural, que asoció (razonablemente) su mala fortuna a las políticas públicas en vigencia, aun cuando pocos dirigentes llegaron a efectuar cuestionamientos integrales de las mismas.

Sin perjuicio de que todos los condicionamientos mencionados se extendieron al conjunto del agro pampeano, dentro de esta región las protestas tendieron a focalizarse –y estallaron con mayor

¹ Al respecto hay que señalar que incluso en el período excepcional de buenos precios –1996 y 1997-, la ruinoso situación de numerosas explotaciones impidió que pudieran aprovechar la circunstancia favorable para intentar revertir su crisis. En estos casos, como comenzó a ocurrir también luego de la devaluación de comienzos de 2002, los beneficios resultan directamente proporcionales a la envergadura económica de los diferentes sujetos sociales, definida por factores estructurales (tamaño de la explotación, medios de producción, propiedad de la tierra) y por la situación coyuntural (acceso al crédito, grado de endeudamiento, disponibilidad de capital de trabajo, etc.).

frecuencia y regularidad- en las zonas socioproductivas ubicadas en el centro y sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sureste de Córdoba.

El desarrollo de estas luchas muy probablemente se potenció en virtud de las particularidades y la fuerza identitaria de los chacareros y colonos asentados en la región conocida tradicionalmente como *maicera*, mayoritariamente imbuidos de las tradiciones de lucha más ricas y arquetípicas del área pampeana –resumidas en el “grito de Alcorta”-, presentes todavía en numerosos componentes de raigambre político-cultural atesorados en la memoria social, y resignificados como un factor de peso a la hora de decidir y organizar la protesta reivindicativa.

Asimismo, al inventariar y ponderar el desarrollo de la acción colectiva agraria durante la convertibilidad, resulta posible afirmar que entre 1993 y 2001 los chacareros pampeanos protagonizaron una de las décadas de luchas reivindicativas y políticas más intensas y reiteradas que registra el siglo XX. Al análisis de algunos aspectos de esta historia nos dedicaremos en el resto de este trabajo, abriendo varias líneas de indagación concurrentes.

Relaciones entre estratificación social, tipos de conflicto y acción colectiva

Para comenzar querríamos hacernos cargo del hecho de que la propuesta implícita en el título de este apartado podría presentar, al menos en apariencia, algunos flancos abiertos a una crítica fácil por parte de las posturas teóricas enfrentadas con la que suelen denominar perspectiva de análisis estructural: “las teorías estructuralistas y holistas, allí donde toman una forma causal, son por lo común toscas en este sentido: relacionan macroestados con macroestados directamente, sin ofrecer un mecanismo que muestre cómo uno causa al otro” (Taylor, 1991).

Al respecto, partiendo de los contenidos básicos de la teoría marxista, resulta evidente que el modo en que los intereses de clase determinan los de los individuos ni es mecánico, ni es constante, ni es absoluto; razón por la cual deben explicitarse hasta donde ello es posible las mediaciones políticas, ideológicas, situacionales y contextuales, que procesadas a través de la acción social –obviamente contradictoria- permiten establecer o no dichas conexiones. Y así y todo tengo fuertes sospechas que estadísticamente el resultado de un juego experimental de evaluación de conductas individuales, frente a problemas similares, confirmaría en buena medida que la mayor parte de los individuos reaccionaría según algún tipo de respuesta consistente con las conductas atribuibles a la clase, fracción o grupo social de su eventual pertenencia.

El problema, en realidad, es que resultados parecidos se obtendrían seguramente si el ejercicio midiera la correlación de una identidad colectiva con las conductas individuales de quienes se identifican con ella.² Aquí la cuestión excede a un único principio explicativo de la existencia y el sentido de la acción colectiva, remitiéndonos a operar con modos solventes de articulación y combinatoria con el objeto de producir explicaciones menos unilaterales y más completas, aun cuando sin duda no nos alejaremos demasiado del principio basal de la lucha de clases como término de orden y encuadramiento final.

De manera que si bien “la acción social, como la participación política, no puede ser reducida a un mero reflejo determinado por las condiciones materiales o los intereses públicos ligados a la posición social” (Reinares, 1995), también es cierto que dichos condicionantes resultan de

² El concepto de identidad colectiva resulta una herramienta útil para el análisis sociológico en la medida que se respete la tensión básica que la condiciona y define, generada por la coexistencia de por los menos: a) prácticas, percepciones y sentimientos compartidos, b) el sustrato específico de clase que entrega los matices, heterogeneidades y contradicciones propios de lo anterior, c) la ideología dominante (de clase) en la sociedad donde se gestan y procesan las identidades colectivas.

importancia crucial para comprender plenamente el sentido de la acción colectiva en general, y la de los chacareros pampeanos en particular.

Al respecto, y para fundamentar la pertinencia del punto, resulta necesario destacar la utilidad del recurso a una tipología socioeconómica (Ameghino, 2007) que, a grandes rasgos, permita pensar agregadamente las distintas categorías de productores agrarios que operan en la pampa húmeda, en tanto que este arbitrio teórico-metodológico (siempre discutible y perfectible) constituye un instrumento dotado de capacidad para aportar elementos de juicio fundamentales para la interpretación del tema de la conflictividad social rural.

Su mayor utilidad se ha mostrado al contribuir a identificar y especificar las distintas modulaciones de los conflictos agrarios, toda vez que el diferente lugar que ocupa cada uno de los sujetos sociales en la estructura de la producción y de la distribución del ingreso se halla en la mayoría de los casos indisolublemente conectado con los distintos grados de solidez, las necesidades y las expectativas socioeconómicas de cada uno de ellos. Y también con las asimétricas modalidades de lucha, las específicas reivindicaciones sectoriales y las condiciones finales, en las que dichos reclamos pueden conquistarse.

Se argumentará que esto no es ni siempre ni necesariamente así. De acuerdo. La acción colectiva y las actividades de los actores contradicen con alguna frecuencia esta clase de planteos; pero se trata en líneas generales de una orientación que en la mayoría de los casos considerados ratifica su pertinencia, lo que la transforma en un auxiliar deseable para los estudios sobre conflicto y movilización. Especialmente cuando se consideran los fenómenos apuntando a una escala social de interpretación de las prácticas y efectos ínsitos en la acción colectiva desplegada como expresión de una conflictividad social específica, como es en nuestro caso la reacción frente a políticas públicas que agudizan las dificultades para la subsistencia de las explotaciones agrarias tornando incierto el futuro de los individuos y familias que las operan.

Desde esta perspectiva, y analizando en especial la primera mitad del siglo XX, se ha señalado la existencia de diferentes tipos de conflictos, en tanto "cada tipo de conflictividad - chacarera, obrera, terrateniente- es definido de uno u otro modo según el sector social que desencadena o inicia el conflicto" (Ansaldi, 1991: 8).

La naturaleza de la conexión, el sentido y el grado de la determinación que vincula a cada sector social con un tipo de conflictividad, es entonces el punto crítico a discernir, teniendo en cuenta que "la acción colectiva es dinámica y sus resultados dependen en gran medida del curso de la interacción" (Tilly, 1987; 74).

Hace ya muchos años que la "sabiduría" popular respondió a los teóricos estructuralistas escribiendo en los muros del París rebelde de 1968 aquel categórico "las estructuras no salen a la calle". Podríamos agregar que tampoco sostienen el conflicto agrario pampeano, ni cortan rutas, ni arrojan clavos "miguelitos" en los caminos. Esto significa que de ninguna manera suscribimos el papel de la determinación estructural como causa única o como causa final de la acción colectiva. Menos aun el de la acción voluntarista e individual de actores que operan fuera de todo escenario, sin temperatura, luz, color, ni piso.

En esta línea de trabajo, y en especial en el análisis de casos, los elementos de juicio provenientes de la estratificación socioeconómica de los productores agrarios contribuirán a la observación de los modos en que dichos sujetos sociales se articulan a efectos de, por ejemplo: a) protagonizar las luchas mediante diversas formas de unidad política; b) enfrentarse entre sí cuando no comparten el diagnóstico de la realidad que los afectaría o no, y/o los objetivos y/o las modalidades de la acción a llevar adelante; y c) producir la subordinación político-ideológica de unos sujetos sociales, y de sus intereses específicos, a la hegemonía de otros sujetos, mediante formas particulares de la articulación intersectorial para el despliegue del conflicto. Lo cual remite directamente a una

profundización del análisis de las luchas políticas desarrolladas por los diversos sectores, incluidas especialmente las que tienen lugar en el interior de sus organizaciones gremiales.

Así, al ponderar los distintos apoyos y rechazos suscitados por la "convertibilidad" -uno de los modos en que se ventiló la lucha de intereses en relación con la problemática agraria durante los '90-, se puede comprobar que una parte del conflicto consistió en la pugna por imponer uno u otro balance político y conceptual acerca de lo ocurrido, por incidir en los programas de reivindicaciones que en cada caso levantaría la protesta agraria, e incluso en la disputa por la propia decisión de realizar -o no- una política confrontativa con el modelo económico y los gobiernos que lo sostuvieron.

De esta manera, por ejemplo, los grandes terratenientes y capitalistas agrarios tendieron a concentrar sus reclamos en el ataque a la presión impositiva (Anales de la Sociedad Rural, 1999), mientras que las pymes del sector pusieron el mayor énfasis en reclamar la refinanciación de sus deudas, créditos para poder sembrar y, en algunos casos, precios sostén para los granos.

Unos eligieron el método de las presiones en los altos niveles del gobierno, el recurso a las amistades y relaciones en el poder, y las consignas que no cuestionaran de fondo el "modelo" económico global, al que apoyaban; mientras que otros -sin descartar los mecanismos anteriores, para los cuales sin embargo disponían de menos aptitud y recursos- impulsarían líneas de acción más directa, movilización de productores y un cuidado menor en que las demandas y propuestas específicas efectuadas pusieran en tela de juicio la política vigente de reforma económica y convertibilidad.

Los niveles políticos e ideológicos de la acción colectiva brindan sin duda sobrados elementos para elaborar explicaciones de las conductas señaladas. Al mismo tiempo no ignoramos los límites, los condicionamientos, los modos de proceder, que dicta la pertenencia o la referenciación de las distintas personas -en este caso de los diferentes tipos de actores políticos y gremiales- respecto a grupos socioeconómicos definidos: es tan infrecuente descubrir a un gran terrateniente y empresario rural arrojando "miguelitos" para interrumpir el paso de los camiones, como imaginar a un chacarero pobre o medio del norte de Buenos Aires en calidad de habitué de las reuniones sociales que frecuentemente organizan la embajada de EE.UU, de Francia o de España en el país.

En suma, dadas las condiciones que determinaron a partir de 1991 la existencia de un umbral o tono conflictivo creciente entre los productores agrarios respecto al gobierno, el modo en que dichos conflictos estallarían o no, se desarrollarían en un sentido u otro, dependería del rol de los actores involucrados, movidos por determinaciones causales, intencionales y estructurales, en un contexto donde el aprovechamiento de las oportunidades coyunturales y los recursos disponibles jugarían un rol central para el desarrollo de las protestas.

Los partidos políticos tradicionales y sus programas agrarios durante los noventa

En relación con el estudio de la conflictividad agraria, con las circunstancias que la originaron, y con el modo en que se procesó -especialmente durante el período menemista-, hemos considerado oportuno introducir una breve caracterización de los análisis y propuestas programáticas correspondientes a algunos de los partidos políticos que operaban en la realidad argentina, aun cuando en líneas generales dichos actores, con la excepción del grupo gobernante, han tendido a presentar un perfil relativamente bajo en materia de política agraria, limitándose a influir -en especial los agrupamientos opositores- preferentemente sobre las dirigencias de las corporaciones agropecuarias.

Efectivamente, considerando a los principales partidos que actúan en la arena argentina, llama la atención que, pese a tratarse de un país donde más del 50% de las exportaciones depende todavía

del agro, no sólo no exista alguna formación política que represente puntualmente sus intereses,³ sino que tampoco se percibe la existencia de alas o fracciones en los partidos tradicionales donde el lobby agrario muestre una representación fácilmente reconocible.

Partiendo de estas comprobaciones hemos efectuado una breve recolección y análisis de diversos materiales de propaganda política editados por los partidos mayoritarios durante la década del noventa, con la finalidad de efectuar una evaluación preliminar de la importancia que, al menos formalmente, se le otorga a los problemas agrarios y las eventuales propuestas programáticas para el sector.

Así, por ejemplo, del estudio de un folleto de 52 páginas titulado “10 compromisos y 100 medidas para una Argentina mejor”, utilizado para la campaña presidencial del binomio justicialista Duhalde-Ortega, surge que en escasas 20 líneas se anuncia el fomento de cadenas agroalimentarias y agroindustriales, asistencia crediticia a dichas cadenas, adecuación de la calidad a los requerimientos del mercado, fomento a mercados de futuros, al seguro agroclimático, preservación del medio ambiente y una “clara” política en materia de biotecnología. Y eso es todo (PJ, 1999).

La Alianza, que finalmente ganaría las elecciones, en su también voluminosa formulación programática enfatizaba la importancia de “los agrodólares”, señalando que “asigna al campo un papel protagónico en el financiamiento del despegue económico de la Argentina y en el desarrollo de nuevas ventajas competitivas”, para lo cual se fomentará la “producción a gran escala”, el “uso intensivo de tecnología”, proponiéndose “estar junto al campo para asegurar la rentabilidad, modernización y competitividad de la producción agropecuaria” (La Alianza, 1999).

Vale señalar que en 1993, bajo la firma del Comité Nacional de la UCR, un análisis de la economía, coincidente con algunas de las hipótesis que manejamos en esta investigación, hacía referencia a que “las causas inmediatas que provocan la más profunda y dramática crisis del agro argentino emergen del modelo económico y social en ejecución, que se subordina a los dictados de los grandes grupos nacionales y foráneos”. En este sentido, explica, los compromisos de pagos externos tomados mediante el Plan Brady determinan la existencia de tasas de interés “confiscatorias”, que desalientan la inversión productiva. Señalaba también la UCR que la eliminación de los derechos a la exportación (retenciones) realizada por el gobierno de Menem “es más aparente que real pues el tipo de cambio está distorsionado por no haberse producido la deflación anunciada al lanzar el plan de Convertibilidad y por la inflación acumulada posteriormente” (Comité Nacional de la UCR, 1993).

En 1995 el radicalismo continuaba denunciando en sus materiales oficiales “los errores de implementación de la actual política económica”, así como el gran “endeudamiento” de una parte de los productores, situación que “demanda una solución de fondo para las unidades productivas viables”, la cual no se especifica con claridad (UCR, 1995).

En 1997 la Alianza santafesina en su programa concentrado de 22 medidas no menciona al sector agropecuario, ni hace ninguna propuesta directamente vinculable con los productores rurales de la provincia (Nueva Oposición, 1997), cuna de la Federación Agraria Argentina y una de las principales zonas de producción agropecuaria de la pampa húmeda y del país.

En suma, el análisis de los materiales de propaganda política de los grandes partidos nacionales muestra en líneas generales que en ellos se presta poca atención, ni se demuestra

³ Si bien la “oligarquía terrateniente, cuya cúpula continúa formando parte de las clases dominantes locales, perdió una parte de su fuerte representación política tradicional luego de la crisis de los partidos conservadores y la emergencia del peronismo, no cabe duda que en general sus intereses no fueron afectados de fondo por ningún gobierno posterior al 55, y que todos ellos -en diferentes medidas- le reservaron su lugar en la política y la economía, por acción (proactivamente) o conciliación.

preocupación, en relación con un sector socioeconómico tan vital, proveedor de los alimentos de la población –y base de los precios al consumidor o costo de vida-, de materias primas diversas y, en conjunto con la agroindustria, proveedor de lo fundamental de las divisas que ingresan al país.

Y también, y quizá sobre todo, pues lo anterior es la visión clásica y reiterada del agro, se comprueba la mínima importancia otorgada a fenómenos de gran alcance como la sustentabilidad de las explotaciones agrarias, de los pueblos de campaña, de sus industrias y servicios vinculados con el campo, etc.; es decir la indiferencia hacia los efectos del proceso de concentración económica y los consecuentes problemas de rentabilidad de los pequeños y medianos productores pampeanos, que los eliminaban crecientemente del mercado dando lugar al éxodo agrario y el deterioro social de vastas regiones.

Este fenómeno de difícil explicación, esta desvinculación relativa de los actores políticos institucionales y los intereses rurales tomados en general, no puede ocultar, sin embargo, que durante buena parte de la historia argentina fueron los sectores agrarios y mercantiles vinculados a ellos los que orientaron la política del país desde la mismísima declaración de la independencia; y a partir de allí –ya entrelazados con el capital extranjero al finalizar el siglo XIX- sin solución de continuidad hasta por lo menos comienzos de la década de 1940 (Halperín Donghi, 1977: 194-...), manteniendo luego y hasta la actualidad una cuota significativa de influencia en la consideración de los factores de poder y entre los hacedores de las políticas públicas del Estado argentino.

De este modo, por razones a veces contrapuestas, los intereses agrarios se fueron desvinculando relativa y parcialmente de su exposición pública en términos de intereses socioeconómicos expresados directamente por los partidos, hasta que entre 1973-1976, al retomarse en niveles superiores la crítica surgida en los cuarenta a la denominada "oligarquía" (también "oligarquía vacuna"), se acabaron por disipar aquellas vinculaciones más visibles entre la cúpula de los productores agrarios y su representación mediante el accionar explícito de los principales partidos políticos. Esto ocurrió seguramente, además de por la propia complejización del funcionamiento del Estado de las clases dominantes, por una mezcla de prudencia, razonable temor, y la elección de vías alternativas –como el grupo de presión y otras formas de lobby sobre el poder de turno-, ejecutadas generalmente sobre la base de potenciar el accionar de las organizaciones gremiales empresarias del sector.

Posteriormente, con la instauración de la dictadura militar y su ejercicio indiscriminado del terrorismo de estado, se inició un largo período (1976-1983) donde los partidos políticos como instrumentos del régimen político de la democracia formal fueron eliminados o puestos en receso, lo que contribuyó a la pérdida de influencia de dichos actores institucionales. Al mismo tiempo la cúpula del sector agrario encontró otras vías para acceder al favor oficial, resultando especialmente notable el caso del superministro de economía, Alfredo Martínez de Hoz, perteneciente a una de las familias terratenientes más antiguas y paradigmáticas del país (Barsky y Bocco, 1991: 189-217).

Finalmente, la recuperación del régimen constitucional en 1984 y su posterior consolidación se han producido en una Argentina que, desde el punto de vista del interés electoral de los partidos, tiende a situar a las clientelas políticas masivas en los principales núcleos urbanos, mientras que ya no existen concentraciones ciudadanas demasiado significativas en el medio rural.

En este contexto cada vez más los comicios se dirimen en la arena definida por los millones de potenciales votantes que habitan ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario, donde las problemáticas que convocan la atención general se vinculan (y son vinculadas) con trabajo, seguridad, salud, vivienda y otros tópicos conectados directamente con la vida cotidiana en estas grandes urbes.

Nótese que durante los noventa, por ejemplo en Buenos Aires, sólo el denominado Gran Buenos Aires –los cinturones urbanos contiguos a la Capital Federal- concentra el 61% de los

votantes. En la provincia de Santa Fe, las ciudades de Rosario y Santa Fe sumaban el 54% del padrón. En Córdoba sólo la ciudad capital poseía el cuarenta por ciento.

A pesar de que escapa a los objetivos de este trabajo avanzar en una comparación con países, como por ejemplo Estados Unidos o Francia, donde es tradicional el peso del voto agrario, vale destacar que en el caso Argentino se mezclan en proporciones difíciles de determinar –sin agotar el total de factores explicativos- no sólo la concentración urbana del voto, sino también el macrocefalismo político del núcleo Capital Federal-Gran Buenos Aires, que junto a los otros grandes distritos electorales reserva espacios apenas formales –aunque ocupen sitios concretos en las instituciones parlamentarias- a los representantes del interior, que pueden en alguna medida expresar y/o haber tomado compromisos con los productores agrarios y otros votantes con intereses en el ámbito rural. Como venimos sugiriendo, una de las conclusiones posibles, o mejor, una hipótesis a investigar, es que la representación de intereses de los grandes latifundistas y grupos económicos agrarios ha ido por cuerda separada de la representación electoral agraria, concentrada en grupos de presión y lobbies sobre los personajes relevantes de la gestión política institucional, que en muchos casos, como el del último ministro de economía del menemismo –Roque Fernández- eran ellos mismos "productores" agropecuarios.

Se trata, seguramente, de modalidades históricamente inscriptas en la cultura política predominante –y en especial en la de las elites- en tanto los ciclos democráticos en Argentina no fueron estables, ni duraderos, ni asociados en general a los intereses rurales de los terratenientes estancieros y rentistas; los que históricamente se sintieron más cómodos –y sin duda mejor representados- por los diversos elencos militares que gerenciaron las dictaduras que azotaron al país durante más de cincuenta años.

Si bien en algunas formulaciones hemos presentado a los intereses agrarios como una totalidad homogénea, importa remarcar que sin embargo ello no es exacto, ya que el conocimiento de las diferentes modalidades de acción social desplegadas por actores emergentes de distintos niveles de la estructura de clases que caracteriza al sector, y las formas en que los partidos políticos representaron de diversas formas unos y/u otros de dichos intereses, nos indican categóricamente que la generalización indiferenciada no permite conocer el movimiento de las representatividades políticas, ni sus características y respectivas eficacias.

Dicho de manera más simple: a lo largo de la historia argentina las contradicciones al interior del mundo rural han sido tan agudas que desde los orígenes coloniales hasta bien entrado el siglo XX toda la dinámica nacional tuvo una de sus grandes fuerzas motrices en el juego de interacciones y representatividades construidas por la acción social de los actores agrarios. Lo cual incluye tanto a los grandes propietarios de tierras y ganado que formaron parte de los grupos dirigentes en la sociedad, como a las expresiones de un empresariado capitalista -diferente al que sería producto del aburguesamiento terrateniente- que resultó reiteradamente impotente para imponer su perspectiva diferenciada, y también a la mayoría de los productores directos chacareros, además de los obreros y otros asalariados rurales.

Este último conjunto, largamente constituido en la mayoría de la población agraria, resultó carente de genuina representación en unas formas “democráticas” que desde siempre y hasta hace muy poco –mediados del siglo XX- no los tuvieron en cuenta como ciudadanos autónomos, sino en todo caso como tropa de maniobra mediante el “voto cantado”, el clientelismo político paternalista, y otros seudo modos de representación, que aun así se circunscribieron a los períodos erráticos donde ciertas formas del régimen constitucional se mantuvieron en precario funcionamiento.

Pero como ya se ha señalado, los tiempos fueron cambiando, bastante rápido y bastante profundamente, dando paso al ciclo político de gobiernos civiles y golpes militares, que culminó en

los años 90, con la consolidación de un modelo económico, social y político que logró -por primera vez en la historia nacional- asociar plena y prolongadamente los intereses de las clases dominantes y el imperialismo con la vigencia del régimen político de la democracia constitucional.

Como inquietud adicional, cabe explorar las razones por las cuales, frente al estallido del paro agrario de 1994, el accionar del Movimiento de Mujeres Agropecuarias, y el resto de las movilizaciones sociales que expresaron la protesta rural hasta el estallido de 2001, resultó tan poco robusta la participación de los partidos políticos tanto en el plano de alentar u organizar las protestas, como interpretarlas, enfrentarlas, y cualquier otra actitud que pudiera considerarse positiva más allá de su sentido particular.

Así, la falta de interés relativo de los actores políticos por comprometerse activamente con los conflictos agrarios se podría vincular con las modalidades que ha adoptado el despliegue del capitalismo en la Argentina dependiente, con desarrollos regionales frustrados y conglomerados urbanos concentrados en pocos grandes centros de población; sumados contradictoriamente a la relativa modernidad y tecnificación del agro pampeano que hace que cada vez menos explotaciones den cuenta de la producción de granos y carnes. Y finalmente, con el decaimiento creciente de las pequeñas y medianas ciudades y pueblos conectados con la actividad agraria, especialmente ajenos durante los noventa a todo proceso de industrialización local, diversificación productiva y otros mecanismos de atraer y consolidar poblaciones de cierta importancia, objetivos largamente ausentes en las políticas públicas argentinas.

Avanzando en la explicación del problema planteado, de lo expuesto surgen, y esto lo tendrían bien en cuenta los actores políticos o influiría directamente sobre sus opciones, algunas certezas:

1. Falta relativa de peso electoral reconocido de los productores rurales;
2. Que la cúpula agraria no utiliza como en el pasado -porque ya no puede, porque no lo estima conducente o por una mezcla de ambas cosas- su influencia en los partidos políticos, recurriendo generalmente a otras formas de presión e influencia;
3. Relativa ausencia de preocupación en los ciudadanos de residencia urbana por los problemas "del campo", en especial los de tipo social, que a diferencia de lo que ocurre en otros países resultan poco conocidos y reconocidos fuera de su ámbito específico. Nótese que aun en el caso de las miles de personas que concurren anualmente a actividades "del campo" -como la exposición de Palermo- la imagen que perciben suele resultar idílica y encubridora de conflictos y contradicciones.

En relación con este punto, sobre el que paradójicamente casi no existe literatura disponible en el país, vale la pena intentar algunas reflexiones pues se trata de un factor que puede contribuir a explicar más de una conducta política, incluidas algunas de las observables en los conflictos de fines del siglo XX.

Al respecto se puede señalar que en general no existe conciencia clara fuera del sector agropecuario sobre los efectos nocivos del proceso de concentración económica en el agro, y de la crisis y desaparición creciente de numerosas explotaciones, especialmente hasta la devaluación de 2002. Sobre esta base resulta absolutamente normal que no se debata, parafraseando el título de un libro estadounidense, si "existe obligación moral de salvar al *farmer*" (Comstock, 1987), y que se excluya rigurosamente este tema en la agenda inmediata de los hacedores de las políticas públicas.

La política y la representación de lo agrario en el imaginario social urbano

Es sabido que en otros países con importantes sectores agropecuarios -aunque de menor importancia relativa dado el peso de otros componentes de dichas economías-, como Estados Unidos o Francia, no solamente se destinan cuantiosos fondos en calidad de subsidios y sostén a sus agricultores,(Arceo, 1988: 31) sino que buena parte de la población urbana, como surge de encuestas realizadas en EE.UU, está dispuesta a pagar impuestos adicionales para ayudar a paliar los problemas

no de los pobres, o los negros, o los huérfanos, sino de los... *farmers*. Lo cual no hace más que evidenciar un fuerte componente de la “cultura política” estadounidense, que se confunde con la identidad nacional, y se nutre de valores y actitudes que se han ido sedimentando a través del tiempo muy vinculados con los núcleos duros de su historia oficial –conquista del oeste, vida de frontera, igualitarismo y democracia agraria, etc.–, los que a su vez contribuyen a explicarlos.

Aquí aparecen varios puntos aptos para ejercitar algunas comparaciones útiles. Los países que se destacan por el peso que muestran los intereses agrícolas modernos localizados en su interior se hallan relativamente bastante poblados y, expresando otro tipo de desarrollo capitalista - diferente al dependiente y subdesarrollado vigente en Argentina-, poseen importantes estructuras industriales, comerciales, financieras y de servicios en general, estrechamente vinculadas (lo que se expresa con fuerza en el plano discursivo) con la producción primaria y su posterior procesamiento. De esta manera quedan definidos numerosos y heterogéneos intereses económicos firmemente instalados en torno al destino del agro, que hallan un importante soporte en la opinión pública en general y en la de los Estados más involucrados en particular, estimulando en consecuencia una firme representación política mediante los congresales electos regularmente para participar del gobierno central y de los gobiernos locales.

En este sentido, aun acordando que el núcleo del poder allí -y en los demás países imperialistas- se referencia sin duda en las grandes corporaciones y grupos económicos extendidos a todo el planeta, el funcionamiento del sistema político y la “competencia” por el voto popular reserva una razonable influencia a los intereses agrarios medios, lo cual implica tanto la existencia de un cierto colchón amortiguador del estallido de conflictos sociales como un rápido involucramiento en ellos por parte de los actores políticos siempre atentos a los humores de un electorado del que puede depender su suerte futura.⁴

Estos elementos de juicio no pueden ser cabalmente explicados sin recurrir a los factores ideológicos, al fuerte peso de las tradiciones culturales en el modelado de muchos de los determinantes de la acción colectiva. Por ejemplo, volviendo sobre la disposición de los ciudadanos a sostener impositivamente a los agricultores, hay algo en el acervo cultural de los ~~votantes en la encuesta citada~~ que lleva a buena parte de los estadounidenses a *asimilar democracia con farmer*, reeditando una y otra vez el *mito turneriano* que asocia la frontera, su gente y su colonización agrícola con el establecimiento y consolidación del individualismo, la existencia y libertad de oportunidades, las posibilidades de ascenso social y, finalmente, la propia naturaleza y estabilidad del sistema democrático (burgués) de gobierno (Cronon, 1989: 668-681).

Otra historia es sin duda la Argentina. Y otra caja de herramientas culturales también, que en el caso que nos ocupa registra sin duda fuertes diferencias, destacándose -y de esto toman nota seguramente los dirigentes políticos- el reemplazo de la figura emblemática del *farmer*, en tanto esforzado productor familiar, por la del estanciero o el patrón terrateniente, antes que por la del chacarero; y complementariamente por la del "gaucho", que como tal puede despertar simpatías pero no es asimilado con la figura del campesino, razón por la cual aparece escindido de los conflictos agrarios modernos, en los que resulta un convidado de piedra en la percepción de lo rural dominante

⁴ Estos razonamientos no deben encubrir, y no deseamos que lo hagan, algunos hechos de fondo que son contradictorios con una lectura superficial de lo que afirmamos. El primero es que las leyes que rigen la evolución del capitalismo agrario han pasado literalmente por arriba de los farmers, eliminando a la gran mayoría de los que existían hace cincuenta o sesenta años. Y segundo, que dada la profundización de ese fenómeno resulta inevitable el crecimiento de la tendencia de largo plazo a la pérdida de importancia relativa del voto agrario.

en el imaginario social urbano, y -dicho sea de paso- también, en tanto peón rural, de los conflictos concretos que estudiamos.

Esta imagen de estancieros y gauchos, y del campo como el terreno donde se enriquecen los "oligarcas", ha sido *—por buenas y sobradas razones—* muy fuerte desde la década del cuarenta, y si bien recibe actualmente el embate de otras visiones alternativas —algunas de signo directamente opuesto, apologéticas de la elite rural, y otras más matizadas—, se sostiene todavía como la principal percepción de la masa social urbana respecto del campo y de sus sujetos sociales característicos:⁵ “la gente todavía tiene el preconceito que los productores agropecuarios tenemos plata —afirmaba en 1994 un dirigente ruralista, sin duda bien retratado en su descripción- y somos llorones. Esto cualquier ama de casa lo piensa así” (CRA, 1994)

Igualmente, dicha perspectiva citadina fue la que mayoritariamente contempló con simpatía, pero con pasividad, la seguidilla de luchas de los chacareros y de las mujeres agrarias, a las que en parte pudo haber observado relativamente confundidas con la defensa del interés de los grandes propietarios y empresarios agropecuarios.

Finalmente, otro factor que vale tener en cuenta junto a los anteriores, son las limitaciones del Estado y la economía argentinas —en última instancia de las clases dominantes y el tipo de país que determinan- para estimular iniciativas respecto al desarrollo del mundo rural similares a las observables en otros países, caracterizados por la menor vulnerabilidad externa y la mayor solidez de sus identidades y soberanías nacionales.⁶

Dicho rápidamente, en las últimas décadas en general, y desde los efectos económicos de la dictadura militar de 1976 en particular, el estado deficitario de las cuentas públicas, el peso del drenaje de recursos hacia el exterior en calidad de fuga de capitales, los pagos de la deuda externa, la frustración de una economía desindustrializada, y una cantidad de otros factores concurrentes en sus consecuencias (Basualdo, 1999; Basualdo, 2001; Ciafardino, 2002), dificultaron seriamente el desarrollo de políticas que, entre otros objetivos, tendieran a reposicionar al agro —y a sus actores sociales más postergados- en la consideración de las agendas gubernamentales, incorporando un concepto amplio de sustentabilidad que diera respuestas a las demandas emergentes de la conflictividad rural que acompañó al régimen convertible.

Así, las causas mencionadas —inherentes al dominio oligárquico imperialista del país- impiden el diseño de políticas activas en el área de la defensa nacional, frenando el éxodo agrario y rediseñando la distribución de la población rural a partir de la instalación de polos de crecimiento y atracción instalados en el ámbito rural en forma articulada con las producciones de base. Comparativamente, la experiencia francesa, y en general buena parte de la europea occidental,

⁵ Posiblemente las representaciones de los más jóvenes se hayan alejado de ciertas imágenes como la de “los Anchorena” y los ricos ganaderos, pero en la misma medida o más perciben ahora la “soja con champagne” de los grandes sojeros. En todo caso, en Argentina es sabido que el Estado saca plata del “campo” (por ejemplo, retenciones), y sin duda hay grandes coincidencias en que “por algo será”. Cuando los Heguy (grandes terratenientes-capitalistas) dicen en El Federal que hacer soja en 2004 fue “como descubrir petróleo”, la sociedad, finalmente, toma nota. En suma, en Argentina se podrá discutir cuánto sacarle al campo, nunca que haya que “ponerle”. Pero “el campo” no es socialmente plano

⁶ Esta observación se comprueba fácilmente recurriendo a la observación de qué porción del gasto público se destina a la financiación de políticas activas para el desarrollo o estabilidad del sector agropecuario, contrastando la situación argentina con lo que ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea o Estados Unidos.

muestran cómo la ocupación plena del territorio se considera una inversión y no un gasto,⁷ directamente vinculado -como se pudo comprobar mediante la experiencia de las guerras e invasiones que azotaron el continente- con el soporte de la soberanía estatal. En este sentido la geopolítica argentina, que debe hacerse cargo de inmensos territorios débil o nulamente poblados, y otros crecientemente despoblados, no dispone -bajo la actual distribución social de los factores de poder- de los recursos imprescindibles para desarrollar dichas políticas.

Asimismo, durante el período abarcado por este estudio, el estado tampoco dispuso, en la medida que se mantuvieron las prioridades fijadas para las políticas públicas por el modelo neoliberal, de fondos para solventar medidas de sostén y subsidio a los pequeños y medianos productores agrarios.⁸

La misma situación se manifiesta en otros temas sensibles para el país y para la percepción urbana de la problemática rural, como la degradación de los suelos, la conservación de las capas acuíferas y la protección del medio ambiente, a lo que nos hemos referido puntualmente al analizar las consecuencias de la “sojización” (Azcuy Ameghino y León, 2005). La falta de recursos con su fuerte restricción sobre el diseño e instrumentación de políticas, y el parcial silenciamiento del tema que ello determina en el “ruido” discursivo de la cotidianeidad que alimenta conciencias y prejuicios, limitan de este modo otra de las potenciales vías de incorporación de la problemática del ámbito agrario en el imaginario social de la población urbana.

Finalmente, la relativa fluidez del abasto y calidad de los alimentos y materias primas de origen agropecuario también coadyuvó a obturar la formulación por parte de amplios sectores de la ciudadanía urbana de preguntas tales cómo: de dónde provienen, quiénes los producen, cuáles son los problemas de dichos productores y otras por el estilo, que podrían contribuir a la percepción de la cuestión rural y los conflictos emergentes de ella.

Por otra parte, en el caso puntual de los noventa, la virtual congelación de precios que impuso la apertura irrestricta de la economía -que llevó a importar carne vacuna cuando el precio del kilo de novillo amenazó con incrementarse- contribuyó adicionalmente a disipar las miradas sobre la producción agraria, la que sólo se tuvo presente en su calidad de fuente de ingreso de divisas vía exportaciones.

En suma, reuniendo algunos conceptos expuestos hasta aquí podríamos sintetizarlos señalando el carácter chacarero -titulares de explotaciones de base familiar- de los pequeños y medianos productores que aportaron el contingente social más numeroso al conjunto de los afectados y agredidos por la política económica del modelo neoliberal. Asimismo es precisamente esa impronta de clase la que tendencialmente recorta los límites y tiñe las modalidades del proceso donde se forjan

⁷ Y aun así, la lógica económica del capitalismo sigue impulsando exitosamente la desaparición permanente y progresiva de las explotaciones agrarias, fenómeno que ha sido especialmente notable en los últimos años.

⁸ Vale reiterar que hacemos estas afirmaciones sin ignorar que en general la mayor parte de los subsidios, por ejemplo en EEUU, afluyen más a manos de los grandes productores y las corporaciones que a los pequeños y medianos farmers. Igualmente sabemos que la quiebra y desaparición de esta clase de productores es constante a pesar de las políticas de sostén. De todas maneras, no siendo el análisis del régimen capitalista el objeto de este trabajo, a los efectos de nuestro razonamiento sólo cabe distinguir entre dos tipos de políticas públicas diametralmente opuestas -como las orientadas a dar cierto sostén a los productores agrarios y las de absoluto retiro del estado-, ya que la ausencia de protección sin duda habría hecho todavía más estrepitosos y catastróficos los efectos de la concentración económica en los países de capitalismo avanzado.

El conflicto agrario pampeano durante la convertibilidad: actores, características... Eduardo Azcuy Ameghino

las identidades colectivas de los actores que protagonizaron la acción social, a partir de la cual eclosionaron el conflicto y la protesta rural.

Al mismo tiempo esta mayoría al interior de las explotaciones agropecuarias no logró transformarse, ni directamente ni por su influencia sobre otros grupos de la sociedad, en una clientela electoral prioritaria para los partidos políticos actuantes en la arena argentina, lo cual explica que más allá de cierta presencia formal su representación por parte de dichos actores resulte sumamente restringida.

Por el contrario, pese a constituir una pequeña minoría, por su propio peso o por su participación en grupos económicos más diversificados, la cúpula del empresariado rural y los grandes propietarios de tierras aun sin conformar una fuente importante de votos continúan siendo obligados interlocutores, financiadores y creadores de opinión pública favorable, respecto a las políticas socioeconómicas que los principales partidos de gobierno y oposición afirman verse obligados a aplicar, dadas las características que habrían tomado los asuntos mundiales desde mediados de los ochenta, reforzados luego por el derrumbe de la URSS, la globalización, el papel de EE.UU como única superpotencia mundial y el peso de las “recomendaciones” de los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.).

En este sentido, ya sea indirectamente mediante contactos informales propios de la vida de relación de los individuos pertenecientes a los sectores altos de la sociedad y el poder, como mediante la utilización de las asociaciones corporativas y otras organizaciones como APRESID, AACREA, etc., en calidad de grupos de presión articulados con otras formas institucionales de lobby, los grandes intereses agrarios mantienen una influencia respetable en las agendas gubernamentales, aun cuando algunos aspectos de las políticas públicas implementadas durante la convertibilidad –como cierto incremento en la carga impositiva- los ubiquen en posiciones momentánea y puntualmente críticas, las que sin embargo en ningún caso implicaron un cuestionamiento del “modelo” económico neoliberal.

Finalmente, culminando el repaso del papel de los diversos actores que definieron y dinamizaron la conflictividad agraria durante los Ochenta, y en este caso para revisar los distintos posicionamientos que adoptaron frente a la política de los gobiernos de Menem y la Alianza, considero útil el ejercicio de correlacionar, aun esquemáticamente, las distintas clases, fracciones y grupos agrarios con las diversas *entidades gremiales* empresarias que operan en el sector agropecuario argentino.

De esta manera es posible comprobar que buena parte de los principales terratenientes – entre ellos muchos ganaderos- y de la gran burguesía rural se hallan asociados a Confederaciones Rurales Argentinas, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y, en especial, a la Sociedad Rural Argentina (Palomino, 1998), entidad fundada en 1865 y de fuerte influencia (Hora, 2002: 2-20), aun hoy, en los asuntos agrarios por su capacidad de incidir hasta cierto punto sobre los tres poderes del estado, potenciada por la diversificación de intereses económicos de la cúpula de grandes propietarios, en muchos casos integrada en grupos económicos –“la oligarquía diversificada”- que operan en el comercio, la industria y las finanzas (Basualdo, 1996).

En líneas generales este grupo de entidades apoyó el ajuste y la reforma económica, sobre todo la SRA, confirmando el hecho de que “la profunda reforma del capitalismo que se está llevando adelante en la Argentina implica una clara transferencia de recursos de los trabajadores y el sector público a los sectores empresarios, por lo que éstos apoyan mayoritariamente al gobierno, tanto a nivel de cámaras como de empresas” (Acuña, 1995: 75).

Sin perjuicio de sus posturas de fondo, incluso estas corporaciones en cuya dirección se halla la elite agraria, por la presión de parte de sus bases debieron, en distintos momentos y medidas,

sumarse a la protesta rural. La razón de esta, se podría decir, contradicción interna ocasional entre la dirección de la corporación y algunos grupos de afiliados, no hace más que reflejar –y así debe explicarse- la eficacia de dos determinaciones básicas: a) no todos los adherentes a una gremial agraria son agentes económicos de similar envergadura e igual capacidad para resistir los efectos adversos de determinada política pública; b) sin embargo, comparten la decisión de depositar su representación en dicha corporación y no en otra –sin perjuicio de que existen casos de superposición de afiliaciones-, lo cual se explica por sus preferencias y elecciones, en tanto se trata de individuos que asocian la identidad colectiva a la que pertenecen (o desean pertenecer) como productores agrarios con la acción compartida con los otros asociados a partir de la cual obtienen y desarrollan dicha identidad.

Junto a los mencionados sujetos sociales y gremiales agrarias que apoyaron la política económica de la convertibilidad, hemos identificado a un conjunto de actores que, al contrario de aquéllos, manifestaron una actitud de mayor oposición relativa al modelo neoliberal. Entre ellos resulta posible contabilizar a buena parte de la mediana burguesía agraria, los chacareros más acomodados y un sector importante de los productores medios de tipo familiar, tradicionalmente nucleados en organizaciones como la Federación Agraria Argentina y, en menor medida, en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria.

En suma, nuestro trabajo se asocia con una línea de estudio orientada a la explicación de la protesta rural que, desde una visión marxista, procura articular la perspectiva de los actores con las determinaciones estructurales y las condiciones y oportunidades cambiantes del contexto en que desarrollan su acción colectiva, la que a su vez reacciona (o podría eventualmente hacerlo) con potencialidad transformadora sobre estructuras y contextos.

Bibliografía

- Acuña, C. H. (1995). Política y economía en la Argentina de los noventa. *América Latina, Hoy*, (11-12).
- Ansaldo, W. (1991). Hipótesis sobre los conflictos agrarios pampeanos. *Ruralia*, (2).
- Arceo, E. (2001). *ALCA, neoliberalismo y nuevo pacto colonial*, Buenos Aires: IEF-CTA.
- Azcuy Ameghino, E. (1999). Reformas económicas y conflicto social agrario: la Argentina menemista, 1991-1999. *II Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas*, La Habana.
- Azcuy Ameghino, E. (2001). El «Movimiento de Mujeres en Lucha»: hipótesis, problemas y propuestas de discusión. *VIII Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia*, Universidad Nacional de Salta.
- Azcuy Ameghino, E. (2005). Tipología de sujetos sociales agrarios pampeanos. Documento de trabajo interno, Buenos Aires: CIEA.
- Azcuy Ameghino, E. y León, C. (2005). La sojización: contradicciones, intereses y debates. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, (23).
- Barsky, O. y Bocco, A. (eds). (1991). *Respuesta a Martínez de Hoz*, Buenos Aires: Imago Mundi.
- Basualdo, E. (1996). Los grupos de sociedades en el agro pampeano. *Desarrollo Económico*, (143).
- Basualdo, E. (1999). *Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*, Bernal: UNQui.
- Basualdo, E. (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Bernal: UNQui.
- Ciafardini, H. (2002). *Textos sobre economía, política e historia*, Rosario.
- Comité Nacional de la UCR, Comisión de asuntos económicos (1993). *Análisis de la economía nacional*, junio.
- Comstock, G. (1987). *Is there a moral obligation to save the family farm*. Iowa: Iowa State University Press.
- Confederación Rural Argentina –CRA- (1994). *Actas de las reuniones del Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas*, 1994.
- de Palomino, M. (1988). *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina*, Buenos Aires: CISEA-GEL.
- Giarracca, N. y Teubal, M. (1993). El día que la Plaza de Mayo se vistió de campo. *Realidad Económica*, (118).

El conflicto agrario pampeano durante la convertibilidad: actores, características...
Eduardo Azcuy Ameghino

- Giarracca, N. y Teubal, M. (1997). El movimiento de mujeres agropecuarias en lucha. *Realidad Económica*, (159).
- Halperín Donghi, T. (1977). *Historia contemporánea de América Latina*. Madrid: Alianza Editorial.
- Higa, M. (1999). Materiales para el estudio del paro agrario de 1994. *Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales*, Universidad de Buenos Aires.
- Hora, R. (2002). *Los terratenientes de la pampa argentina*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- La Alianza (1999). *Plataforma Electoral Alianza UCR-FREPASO*.
- Martínez Nogueira, R. (1988). Las organizaciones corporativas del sector agropecuario. En AA. VV., *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Partido Justicialista –PJ– (1999). *Plataforma Electoral*, agosto.
- Prunotto, C. y Allende Rubino, H. (1988). *El precio sostén: La continuidad de la Empresa Agraria*, Fundación Federación Agraria.
- Reinares, F. (1995). Teoría de la acción colectiva y participación política. En P. del Castillo (comp.), *Comportamiento político y electoral*, Madrid: CIS.
- Sociedad Rural Argentina –SRA– (1999). *Anales de la Sociedad Rural*, (5).
- Taylor, M. (1991). Racionalidad y acción colectiva revolucionaria. En F. Aguiar (comp.), *Intereses individuales y acción colectiva*, Madrid: Pablo Iglesias.
- Tilly, C. (1999), Modelli e realtà dell'azione collettiva popolare. En J. Cohen, A. Melucci, C. Offe, A. Pizzorno, Ch. Tilly, A. Touraine, *I nuovi movimenti sociali*, Roma: Franco Angeli Editore, Roma, 1987, p. 74.
- Unión Cívica Radical –UCR– (1997). *Revista Nueva Oposición*. 2 (5).
- Unión Cívica Radical –UCR– (1995). *Plataforma Nacional*.
- William Cronon. Revisiting Turner's Vanishing Frontier. En C. Milner, *Major Problems in the History of the American West* (pp. 668-681), EEUU: Heath and Company.